

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

**A ROGER ARMANDO ARIÁS ALVARADO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
Y A TRAVÉS DE SU OFICIAL DE INFORMACIÓN**

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación **NUE ACUM 47 Y 71-A-2020 (DH)**, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 30 de septiembre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente **DICE:** "....."



NUE ACUM 47 y 71 -A-2020 (DH)

Pereira Joya contra Universidad de El Salvador (UES)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas del treinta de septiembre de dos mil veinte.

Descripción del caso

I. El presente procedimiento tuvo origen en los recursos de apelación interpuestos, de forma individual, el 19 de febrero y el 12 de marzo, ambas del corriente año, por **Santos Fredis Pereira Joya**, en contra de las resoluciones de referencia UAIP/20/2020 y UAIP/RE046/2020, respectivamente, emitidas por la Oficial de Información de la **Universidad de El Salvador (UES)**; ambos tramitados de forma acumulada por este Instituto bajo la referencia que encabeza la presente resolución.

En este sentido, el apelante manifestó haber solicitado a la UES, la siguiente información, en el primer requerimiento:

1) Acuerdos de CSU en los que aprueba contratación en el tiempo adicional y/o tiempo integral para el año 2019 (docentes y personal administrativo);

2) Listado de personal contratado para impartir horas clases en la facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019;

3) Copia del currículum de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas;

4) Copia del currículum de las personas contratadas para impartir horas clases en la Facultad de Ciencias Económicas, para el ciclo I y II-2019;

5) Listado de personal jubilado que está laborando como docente en la Facultad de Ciencias Económicas; y

6) Listado y currículum de las personas que han sido contratadas para asesorar trabajos de graduación (Facultad de Ciencias Económicas).

En el segundo requerimiento, el apelante solicitó la siguiente información:

1) Copias de las actas de sesión de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2013-2015; y

2) Listado de personas pensionadas que están contratadas en la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2017-2020.

Al respecto, la Oficial de Información del ente obligado resolvió proporcionar respuestas emitidas por otros servidores públicos del ente obligado, en los siguientes términos:

1. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, recibida con fecha 30 de enero del 2020, mediante la cual remite respuesta a los numerales 2, 3, 5 y 6, de la solicitud de información;

2. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad De Ciencias Económicas, recibida con fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual remite

respuesta a los numerales 2 en que establece consulta directa para el día viernes 21 de febrero de 2020 a las 8:00 a.m. a las 12:00 pm de la solicitud de información.

3. Resolución de Orientación UAIP/RO01 (20)/2020; y

4. Se Adjuntaron todos los oficios remitidos a efecto de realizar gestión de información.

5. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, recibida con fecha 6 de marzo de 2020, mediante la cual expresa que lo relativo a las actas de junta directiva se encuentran publicadas en el portal de transparencia transparencia.fce.ues.edu.sv; y

6. En lo relativo al listado de personas pensionadas contratadas por la facultad remite informe de la coordinadora de recursos humanos.

Al respecto, el peticionario manifestó su inconformidad con lo resuelto en el primer requerimiento, señalando que se le entregó de manera incompleta con respecto a los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y se pretende obligársele a hacer una consulta directa respecto a una información que no requiere esa diligencia, haciendo uso arbitrario de lo establecido en el Art 63 de la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); pues no pretende más que conocer la identidad del peticionario; además, que la obligación de la institución es la de brindarle una versión pública de los currículos solicitados, ya que con eso se puede verificar la pertinencia de la contratación del personal y el uso de los recursos del Estado en la Contratación del personal idóneo.

Asimismo, respecto de la segunda de sus solicitudes expresó su inconformidad, en lo medular, en que se le dirigió a consultar las actas solicitadas al portal de transparencia del ente obligado cuando él había solicitado remisión en formato electrónico, y en el hecho que el listado de personal jubilado o pensionado le había sido entregado de forma incompleta.

II. En consecuencia, las apelaciones fueron admitidas y este Instituto determinó la delimitación de su objeto de controversia en todos los puntos de inconformidad planteados por el apelante como se detalló en el romano anterior, igualmente se ordenó su tramitación acumulada. Asimismo, se designó a la Comisionada Yanira del Carmen Cortez, para instruir

el presente procedimiento y elaborar el proyecto de resolución, sin embargo posteriormente fue sustituida por la Comisionada Daniella Huezo Santos, a quien se le encomendó continuar y finalizar tal función.

III. En observancia al derecho de defensa y audiencia, imperante en todo procedimiento administrativo y de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, se corrió traslado a la UES, para que rindiera su informe justificativo. Dicho informe fue emitido por el señor Roger Armando Arias Alvarado, en su calidad de Rector de la UES y su representante legal, y fue remitido a este Instituto, el 9 de julio del corriente año.

En dicho informe, el ente obligado hizo un breve resumen de los pasajes más importantes del trámite de las solicitudes de información del apelante y del procedimiento ante este Instituto, y en lo medular alegó, que pese a ser el representante legal de la UES, en el ámbito interno, de acuerdo con la normativa propia del ente obligado, las facultades que lo conforman no se encuentran bajo su dirección por lo que, según su criterio, no está facultado para decidir sobre la información que estas producen o administran.

IV. El 2 de septiembre del corriente año, se llevó a cabo la audiencia oral del presente procedimiento con la presencia del apelante y del ente obligado; en el acto el señor rector de la UES, designó como procurador del ente obligado al señor Nixon Rogelio Hernández, quien se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES.

De la prueba ofertada por las partes el Pleno de Comisionadas y Comisionados únicamente admitió la fotocaptura presentada por la parte apelante, consistente en imagen de la publicación realizada en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, el 10 de agosto del presente año, misma que se verificó en la página oficial y que a esta fecha aún permanece la publicación, donde se aprecia una imagen en la que textualmente dice: “ AUTORIDADES, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Sr. José Ramiro Moz (Q.E.P.D.). Amadísimo padre de la Licenciada Yeny Magdalena Moz, docente hora clase de la Escuela de Mercadeo Internacional de nuestra facultad, a quien expresamos nuestro más sentido pésame y nos unimos al dolor que embarga a su familia. “Hacia la Libertad por La Cultura” Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2020” (sic). Asimismo, con relación a la prueba ofertada por el ente obligado consistente en: peticiones que han realizado varios docentes dirigidos al representante legal de la Universidad de El Salvador en la que constan en veinte folios, donde solicitan que no se divulgue o se haga entrega de la documentación relacionada a currículos, atestados y documentación de tipo contractual, el pleno de comisionados deliberó al respecto y decidió admitir por ser útil y pertinente al presente caso.

Una vez realizado el ofrecimiento probatorio, se otorgó a las partes oportunidad para la realización de sus argumentos; en la que ambas reafirmaron sus pretensiones.

Por otra parte, el 7 de septiembre del corriente año, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas solicitó el video de la audiencia oral del presente caso, que fue realizada el día 2 de septiembre de los corrientes

Análisis del caso

Previo a iniciar el respectivo examen, este Instituto tiene a bien indicar que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn). Sin embargo, este tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el artículo 6 de la Cn. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada que tengan interés público.

De igual forma, se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

En este sentido, el análisis jurídico del presente caso debe incluir dos aspectos fundamentales, por una parte (I) este Instituto debe pronunciarse sobre la naturaleza de la información objeto de controversia y la posibilidad de que esta sea entregada de conformidad al principio de máxima divulgación; y por otra, (II) deben realizarse algunas consideraciones sobre el procedimiento de acceso a la información seguido en el ente obligado.

I. Inicialmente debe recordarse que el objeto del presente procedimiento consiste en información con contenido distinto; por lo que, cada apartado de información requerida por el apelante se analizará por separado.

A. Sobre información relativa a: *listado de personal contratado para impartir horas clases en la facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019.*

Sobre este apartado, se aclara que fue respondido por medio de la entrega de dos notas internas, una suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas emitida el 14 de febrero del corriente año, y otra suscrita por la Coordinadora de Recursos Humanos de la UES en la que se indica textualmente que “no cuenta con el tipo de contratación **Hora Clase**” (sic). Sobre la base de estos dos documentos, el ente dio respuesta a lo requerido por el ciudadano apelante, sin determinar claramente el fondo de lo resuelto, pues en estricto sentido no se declaró la inexistencia de la información solicitada.

En este orden de ideas, resulta importante retomar los argumentos de la UES, expresados a través de su procurador Nixon Rogelio Hernández, quien indicó durante la audiencia oral del presente caso, que el término “hora clase” es una forma de referirse a un mecanismo de contratación, pero que no indica ninguna de las categorías jurídicas bajo las

que contratan en el ente obligado particularmente en lo relativo a la FCE, asimismo manifestó que no se encuentran en la obligación de indicarle a los solicitantes cómo realizar sus requerimientos, a la vez que aludió que la solicitud había sido mal realizada.

Adicionalmente, debe considerarse que de acuerdo con la prueba ofrecida por parte del apelante y admitida por este Instituto, se ha determinado que, en el lenguaje común, la misma Facultad de Ciencias Económicas de la UES se ha referido públicamente sobre la existencia de “catedráticos hora clase”, situación que fue aceptada expresamente por el procurador de la UES, quien también es decano de la referida Facultad.

Lo anterior, ha de ser interpretado en virtud de la respuesta emitida por el ente obligado ante el requerimiento del solicitante, pues no se ha declarado inexistencia de contrataciones de personal bajo esta modalidad, sino que indicó que el solicitante no invocó la categoría de contrataciones por el nombre que jurídicamente posee.

Al respecto, debe afirmarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información, al igual que el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometido a una serie de principios que delimitan el ámbito del ejercicio de las funciones de las instituciones en protección de los derechos de los particulares. Al procedimiento del acceso a la información particularmente le resultan aplicables, entre otros, los principios de antiformalismo, eficacia y el de buena fe.

El principio de antiformalismo se encuentra regulado en el Art. 3 número 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), de acuerdo con este principio la administración se encuentra obligada a realizar interpretaciones sobre los requisitos a cumplir por los administrados, con el fin de garantizar el acceso a los procedimientos y su resolución satisfactoria. Por su parte, el principio de eficacia, establecido en el Art. 3 número 4 de la LPA, establece la obligación de la administración de subsanar de oficio, incluso sin prevenir al solicitante, de todos aquellos defectos advertidos en los requerimientos de los particulares, la que se confirma con lo dispuesto en el Art. 15 del mismo cuerpo normativo. De igual

forma, el principio de buena fe se encuentra establecido en el Art. 3 número 9 de la LPA, y este dispone que la Administración deberá ser conducida de forma honesta y leal.

En virtud de los principios antes descritos, se infiere la obligación de las instituciones, para atender todas las solicitudes de información con orientación a la satisfacción de los derechos de los particulares, por encima de las formalidades procesales, pues ningún administrado tiene la obligación de conocer a detalle el funcionamiento interno de los entes públicos, y este elemento no puede ser exigible como requisito para satisfacer su derecho de acceso a la información pública.

En consecuencia, las instituciones deben suplir los errores en que incurran los solicitantes, o, en su defecto, realizar las prevenciones a fin de sanear los requerimientos antes de incurrir en afectaciones a los derechos de los particulares. Asimismo, esto implica evitar cualquier situación que pudiera hacer incurrir al solicitante en un error para posteriormente aprovecharse de este en detrimento de sus derechos o de los efectos del procedimiento que se pretende.

En aplicación al caso en conocimiento, el ente obligado prescindió tanto del saneamiento oficioso de la pretensión, como de la realización de prevenciones sobre la solicitud, y posteriormente fundamentó sus argumentos en los presuntos errores o inconsistencias incurridos por el requirente, la actuación antes descrita constituye una grave inobservancia a la normativa vigente para el procedimiento de acceso a la información que no resulta compatible con el principio de buena fe.

La información requerida en este apartado consiste en listado de nombres de personas contratadas bajo cierta modalidad que implica la realización de funciones relativas a la docencia, no de forma permanente ni a tiempo completo, sino por lo que coloquialmente se conoce como “hora clase; en los términos del lenguaje común, este término, implica la contratación para impartir una o varias materias determinadas, limitando el ámbito de responsabilidad de la persona contratada y el régimen de contratación a las materias

asignadas, exclusivamente en el período en que se imparten, sin que esto conlleve necesariamente una vinculación laboral permanente con la institución.

Debe resaltarse, que la información antes referida constituye información oficiosa en los términos establecidos en el Art. 10 número 5 de la LAIP y el Art. 2.6 del Lineamiento 2 para la Publicación de Información oficiosa, emitido por este Instituto. Adicionalmente, el ente obligado no ha aportado ningún elemento probatorio que justifique la restricción de acceso al listado requerido, por lo que en aplicación del principio de máxima publicidad establecido en el Art. 4 letra “a” y 5 de la LAIP, corresponde ordenar a la UES que proporcione al solicitante listado de personal contratado para impartir horas clases en la facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019, aclarando que deberá incluir en este listado todo tipo de contratación, sin importar el nombre que esta reciba internamente, que se adecúe o resulte análogo a la concepción normal del hora clase o sus consecuencias.

B. Sobre los requerimientos relativos a: (i) Copia del currículum de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas; y (ii) copia del currículum de las personas contratadas para impartir horas clases en la Facultad de Ciencias Económicas, para el ciclo I y II-2019.

Según consta en el expediente administrativo correspondiente al trámite de la solicitud de acceso a la información de referencia UAIP/RE020/2020, por medio de nota interna sin número de referencia, emitida el 14 de febrero del corriente año, el Decano de la FCE, ofreció al solicitante acceso a copia de los currículos de la planta docente de la FCE, por medio de consulta directa, incluso señaló fecha para tal efecto.

Sin embargo, al respecto de estos dos requerimientos el ente obligado en el presente procedimiento de apelación alegó, en lo esencial, que el contenido de las hojas de vida, o currículums, contiene información de naturaleza confidencial, y que no se cuenta con la autorización de los titulares para divulgar dicha información. Adicionalmente, respecto del primero de los requerimientos enumerados en este apartado sobre el currículum de la planta

docente de la FCE de la UES, el ente ha indicado que el ciudadano requirente no determinó el período sobre el que solicitaba información, lo que supuestamente dificulta su obtención.

Acerca de la publicidad de los currículums de funcionarios o empleados públicos debe valorarse que este tipo de información puede enmarcarse dentro de una categoría de información oficiosa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 número 3 de la LAIP y 1 número 1.3 del lineamiento número 2 para la publicación de información oficiosa; que, en síntesis, expresan que las instituciones obligadas de la LAIP deben de tener a disposición de la ciudadanía el currículo de los funcionarios que presidan las mismas, el que debe incluir como mínimo su formación académica actualizada y experiencia laboral previa.

Ahora bien, independientemente del cargo -empleado público o funcionario- de que se trate, este Instituto en reiterados pronunciamientos ha indicado que el currículo, es un documento del cual se pueden desprender las habilidades, conocimientos, aptitudes y experiencia de una persona, por lo que se convierte en un instrumento que permite una mirada superficial pero eficaz de la capacidad e idoneidad de una persona para el ejercicio de un trabajo, y con mayor relevancia, el ejercicio de la función pública; es decir, a través del mismo la ciudadanía conoce la competencia de los servidores públicos. En ese sentido y tomando en cuenta la relevancia de este tipo de información, se establece que los currículos de los servidores públicos son información pública, y dependiendo del cargo que se ostente – funcionarios públicos – los mismos deberán inexcusablemente de estar de forma permanente y actualizada a disposición de toda la ciudadanía.

Sin embargo, el contenido tradicional de este tipo de documentos suele incluir información de su titular, como sus datos de identificación, medios de contacto y referencias personales, entre otros aspectos, que constituyen datos personales, y por lo tanto se encuentran protegidos por la prohibición de difusión establecida en el Art. 33 de la LAIP. En este orden de ideas, puede afirmarse que las hojas de vida o currículos de empleados públicos contienen información de distinta naturaleza, tanto aspectos de interés público como elementos confidenciales, por ello, no resulta atendible la consulta directa propuesta por el

ente, pues su realización implicaría la revelación de información personal sin la debida justificación.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Art. 30 de la LAIP, es obligación de los entes realizar versiones públicas de los documentos que contengan datos cuya difusión deba restringirse. Para el caso en particular, la UES deberá proporcionar al solicitante una versión pública de la información requerida en este apartado, en la que, se identifique con claridad al docente que corresponde el currículum, su cargo, detalle completo de su formación académica y detalle completo de su experiencia laboral y académica previa; debiendo restringir únicamente el acceso a los datos personales contenidos en el documento.

En otro orden de ideas, en lo relativo a la supuesta imposibilidad de determinar el alcance de la solicitud respecto de los currículos de la planta docente de la FCE, debe destacarse que obra sobre el ente obligado un mandato de saneamiento de los requerimientos de los particulares, ya sea de oficio, o cuando no fuere posible, por medio de prevenciones. Sin embargo, en el caso en comento la UES prescindió del saneamiento de un requerimiento supuestamente incomprensible o ambiguo, en tal sentido, el ente obligado no puede alegar su propia omisión en su beneficio, para excluirse de la obligación de satisfacer el derecho de acceso a la información del solicitante.

En tal sentido, aunque el deber de interpretación pro ser humano obliga a entender el requerimiento en los términos más amplios posibles, debe considerarse que el solicitante ha delimitado de forma voluntaria este requerimiento durante la audiencia oral, circunscribiendo su petición únicamente a lo correspondiente a los ciclos universitarios I y II del año 2019, por lo que la decisión de este Instituto tomará en cuenta este elemento, y en lo subsiguiente se delimitará este requerimiento a lo establecido por el apelante.

En virtud de lo anteriormente expuesto, corresponde ordenar al ente obligado que proporcione apelante versiones públicas del currículum de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas; y del currículum de las personas contratadas para impartir horas clases en la Facultad de Ciencias Económicas, para el ciclo I y II-2019.

C. Sobre el requerimiento relativo a *listado y currículum de las personas que han sido contratadas para asesorar trabajos de graduación (Facultad de Ciencias Económicas)*.

El ente obligado basó su postura al respecto de este apartado, en la supuesta imprecisión incurrida por el apelante al no determinar el período respecto del que solicita información y en su valoración sobre la confidencialidad de la información contenida en los currículums. Al respecto, este Instituto considera que las valoraciones anteriormente realizadas sobre la publicidad de los listados de personas contratadas por el ente obligado y lo correspondiente a su currículum, resulta aplicable también a las personas contratadas para brindar la asesoría correspondiente a los trabajos de graduación, en la medida que son personas que reciben una remuneración proveniente del presupuesto de la institución pública para la realización de actividades académicas.

De igual forma, resulta aplicable a este requerimiento la delimitación temporal realizada voluntariamente por el requirente a la que se hizo alusión en el apartado anterior, por lo que en lo pertinente, se considerará que este requerimiento hace referencia a los ciclos I y II del año 2019. Por lo tanto, corresponde ordenar al ente obligado que proporcione al apelante listado y versión pública del currículum de las personas que han sido contratadas para asesorar trabajos de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019.

D. Sobre los requerimientos relativos al *listado de personal jubilado que está laborando como docente en la Facultad de Ciencias Económicas; y Listado de personas pensionadas que están contratadas en la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2017-2020*.

Inicialmente debe destacarse que el ente obligado no ha señalado objeción alguna sobre la publicidad de la información requerida en este apartado, la que incluso ya fue puesta a disposición del apelante de forma parcial. En tal sentido, la disconformidad del requirente radica en que este apartado fue resuelto por medio de la entrega de una nota interna sin número de referencia emitida el 3 de marzo del corriente año por la Coordinadora de

Recursos Humanos de la UES, en la que se expresa que se entrega listado de personas que están contratadas en la FCE al momento de la emisión de la misma, por lo que considera que su requerimiento ha sido resuelto de forma incompleta.

Al respecto de este tipo de información este Instituto ya se ha pronunciado con anterioridad ¹afirmando la publicidad de la información concerniente a la calidad de jubilados de empleados públicos en la medida que la capacidad de contraloría ciudadana sobre este aspecto reviste de interés público a dichos datos.

En este orden, debe analizarse el contenido de la información proporcionada al solicitante en contraste con los extremos planteados en la solicitud; en esencia este requerimiento implica que el apelante pretende acceder a un listado de todas las personas que han laborado para la UES, particularmente en la FCE para el período comprendido entre los años 2017 y 2020 desagregando aquellos que tienen cargo docente.

Sin embargo, al analizar la respuesta emitida por el ente a través de la nota de la Coordinadora de Recursos Humanos del ente obligado, se puede verificar que lo proveído no corresponde a lo solicitado por el apelante, pues únicamente se hace referencia al estado actual de la información, sin ni siquiera mencionar lo correspondiente a años anteriores.

En tal sentido, corresponde ordenar al ente obligado que proporcione de forma completa la información requerida por el solicitante.

E. Relativo al requerimiento sobre: Copias de las actas de sesión de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2013-2015.

El ente obligado respondió a este requerimiento por medio de una nota interna sin número de referencia emitida por el Decano de la FCE de la UES el 9 de marzo del corriente año, en la que se orienta al ciudadano a buscar la información en el portal de transparencia del ente obligado accesible en la dirección: transparencia.fce.ues.edu.sv. Al respecto, el apelante ha manifestado su inconformidad en cuanto a la dificultad de que le presenta buscar

¹ Instituto de Acceso a la Información Pública. Resolución definitiva de recurso de apelación NUE 103-A-2015 (CO), emitida el 11 de agosto de dos mil quince.

la información solicitada en todo el portal de transparencia, cuando había solicitado la remisión por medios electrónicos como forma de entrega.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que la remisión a los repositorios en línea en los que se pueda consultar la información en una herramienta a disposición de los entes obligados, para que puedan, de forma activa y proactiva, poner a disposición del público la información de interés general de tal forma que se potencie el debido acceso a la información de los particulares a través de un procedimiento más expedito.

Sin embargo, para lograr este objetivo no pueden desatenderse las mismas reglas aplicables a otras formas de entrega de la información. En consecuencia, aunque se remita al solicitante a consultar un sitio web, en concordancia con los principios de disponibilidad, sencillez e integridad, regulados en el Art. 4 de la LAIP, es obligación del ente señalar con precisión el lugar en donde puede consultarse la información, y asegurarse que esta se encuentre completa, accesible y sea veraz.

En lo relativo al caso, es un hecho notorio, dotado de publicidad y de acceso al público que la UES posee un portal de transparencia; sin embargo, haciendo una revisión somera del apartado correspondiente a las actas de la FCE², puede verificarse que en dicho repositorio se encuentran 21 actas identificadas como correspondientes al año 2015, mientras que de la lectura de los números correlativos de referencia de cada una se advierte que no se encuentran en el sitio al menos ocho números correlativos; en lo pertinente al año 2014 se encuentran 41 actas de cuyos correlativos se advierte que no se encuentran publicados diecinueve; mientras que para el año 2013 únicamente se encuentran publicadas 7 actas.

En virtud de lo anterior, este Instituto no cuenta con los elementos suficientes para determinar que la información se encuentra publicada de forma completa en el sitio web al que fue referido el solicitante. Por lo que, considerando que el ente obligado no ha aportado elementos probatorios orientados a demostrar la completitud de la información

² Consultado el 23 de septiembre de 2020, en: <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/index.php/documentos-junta-directiva/sesiones> .

correspondiente, debe ordenarse a la UES que proporcione al solicitante las copias electrónicas de todas las actas de sesión de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo emitidas entre los años 2013-2015.

II. En lo relativo al procedimiento implementado por la UES en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información de las que derivaron las apelaciones conocidas en este procedimiento, este Instituto considera necesario realizar algunas consideraciones.

En primer lugar, como se ha mencionado en esta resolución, los entes obligados al cumplimiento de la LAIP deben procurar el saneamiento de los requerimientos de los particulares, incluso de oficio, cuando estos incurran en situaciones que podrían derivar en malas interpretaciones de los aspectos solicitados o afectar el normal desarrollo de los procedimientos, incluso, se tiene la posibilidad de realizar prevenciones, a fin de que las solicitudes sean debidamente atendidas por el ente.

Esta función, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 50 letras “a” y “c” de la LAIP, corresponde principalmente a los oficiales de información, pues en este cargo se deposita la obligación de conducir el procedimiento de acceso a la información y el deber de auxilio a los solicitantes. Sin embargo, esto no implica que este deber, intrínsecamente institucional, no deba ser ejercido también por las unidades a las que se les requiere información.

En los casos conocidos en la presente causa, ha sido evidente que algunos de los puntos de controversia derivan directamente de la falta de comunicación entre el ente obligado y el ciudadano solicitante, particularmente en los aspectos en los que se les ha atribuido a este último la responsabilidad sobre la respuesta emitida por el ente, aludiendo los términos en que fueron redactados los requerimientos. En este sentido, se advierte al ente obligado que debe regular adecuadamente los procedimientos internos para el trámite de las solicitudes de acceso a fin de evitar situaciones como la antes descrita.

Asimismo, se advierte que de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 65 y 82 de la LAIP, corresponde a los oficiales de información emitir resoluciones debidamente motivadas sobre el fondo de lo solicitado por los requirentes, en concordancia con lo anterior se afirma

el criterio que los oficiales de información tienen una función técnica relevante en el procedimiento de acceso a la información que trasciende la mera comunicación de las solicitudes y requerimientos internos.

Por lo tanto, los oficiales de información no pueden delegar ni formal ni materialmente el deber de pronunciamiento sobre el fondo sobre lo requerido por los solicitantes, que servirá de base para formulación del recurso de apelación en caso que sea procedente.

En el caso en concreto, las dos resoluciones venidas en apelación fueron respondidas en el sentido de proporcionar al apelante acceso a documentos internos emitidos por autoridades institucionales en las que se fundamenta la respuesta a al requerimiento del ciudadano, sin embargo, tal labor corresponde a la oficial de información, que no puede tener por satisfechos los requisitos de la resolución de fondo, trasladando su motivación sin mayor análisis a lo respondido por otro servidor público.

En tal sentido, se advierte a la oficial de información del ente obligado, que debe atender el mandato correspondiente a emitir en un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido en las resoluciones de los procedimientos de acceso a la información.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Revocar** las resoluciones de la oficial de información de la Universidad de El Salvador venidas en apelación.

b) **Ordenar** a la **Universidad de El Salvador**, a través de su Máxima autoridad o titular, obligación extensible al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que en el plazo de **8 días hábiles** a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución,

en los términos expresados en esta resolución, entregue a **Santos Fredis Pereira Joya** la información consistente en: (i) listado de personal contratado para impartir horas clases en la facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019, aclarando que deberá incluir en este listado todo tipo de contratación, sin importar el nombre que esta reciba internamente, que se adecúe o resulte análogo a la concepción normal de hora clase; (ii) versiones públicas del currículo de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas; y del currículo de las personas contratadas para impartir horas clases en la Facultad de Ciencias Económicas, para el ciclo I y II-2019; (iii) listado y versión pública del currículo de las personas que han sido contratadas para asesorar trabajos de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019; (iv) listado de personas pensionadas o jubiladas que están, o han estado, contratadas en la Facultad de Ciencias Económicas en el período comprendido entre los años 2017 al 2020; y (v) copia electrónica de todas las actas de sesión de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo emitidas entre los años 2013-2015.

c) Ordenar a la **Universidad de El Salvador**, que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo establecido en literal anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en el literal b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al Art. 167 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

e) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) Conceder al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la **UES**, el videoencia oral correspondiente al presente caso.

g) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese. —

-----A.GREGORI-----C.L.E-----R.GOMEZ-----
PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN ~~~~~RUBRICADAS~~~~~